

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio –segunda instancia-

Santiago de Cali, cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2.021)

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA.
EXPEDIENTE:	76001-33-33-001-2019-00057-01.
DEMANDANTE:	RICARDO LEÓN RAMÍREZ CORTÉS Y OTROS <a href="mailto:sulay0125@yahoo.es">sulay0125@yahoo.es</a> ; <a href="mailto:abogadamsh@hotmail.es">abogadamsh@hotmail.es</a>
DEMANDADO:	MINISTERIO DEL INTERIOR- MINISTERIO DE JUSTICIA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL <a href="mailto:notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co">notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co</a> <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co">notificacionesjudiciales@cali.gov.co</a> <a href="mailto:notificaciones.cali@mindefensa.gov.co">notificaciones.cali@mindefensa.gov.co</a> <a href="mailto:deval.notificacion@policia.gov.co">deval.notificacion@policia.gov.co</a> <a href="mailto:notificaciones.judiciales@mininterior.gov.co">notificaciones.judiciales@mininterior.gov.co</a>
ASUNTO	CONFIRMA AUTO QUE DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

I. OBJETO DE LA DECISION

La Sala resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio de fecha cinco (05) de marzo de dos mil veinte (2020), proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, el señor Ricardo León Ramírez Cortés y otros demandaron al Ministerio de Defensa Nacional y Otros, solicitando<sup>1</sup> que se condene la reparación de los perjuicios materiales y morales producidos al demandante y su familia por el secuestro del que fue objeto a manos de integrantes del grupo armado FARC el día 3 de abril de 2003, en el municipio de Santiago de Cali, daño que se le atribuye al Estado a título de falla del servicio por omisión en su obligación de prevención y protección.

III. PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio dictado en audiencia de fecha cinco (05) de marzo de dos mil veinte (2020), la Juez declaró probada la excepción de caducidad, en aplicación de la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 señalando dos eventos de partida en que podría tomarse para hacer la contabilización de la caducidad y en todos ellos se advierte caduco el medio de control.

Se tuvieron en cuenta los siguientes referentes para su conteo:

Fecha de secuestro: 3 de abril de 2003.

<sup>1</sup> Ver folios 1-15.

Fecha de liberación: 30 de noviembre de 2006.

Fecha de Presentación de la conciliación prejudicial: 25 de enero de 2019.

Fecha de presentación de la demanda: 26 de marzo de 2019.

- 1) Basada en los hechos de la demanda (Fl. 1 y 2) indicó que el 11 de abril de 2003 la compañera permanente del señor Ricardo León Ramírez Cortés, denunció ante la Fiscalía el hecho del secuestro, aduciendo que desde esa fecha se tuvo conocimiento de la presunta omisión del Estado, teniendo hasta el día 12 de abril de 2005 para presentar solicitud de conciliación y no se hizo, operando la caducidad.
- 2) La Sentencia de Segunda Instancia dictada el 7 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal por la cual se confirmó una condena por secuestro extorsivo en cabeza del señor Andrés Ramírez Quiroz, miembro de las FARC quedó ejecutoriada el día 24 de febrero de 2009 (Fl. 133) por los hechos narrados en la demanda por lo que concluyó que también operó el fenómeno jurídico de la caducidad-.

No tuvo en cuenta contabilizar la caducidad desde el 8 de febrero de 2017 (Fl. 75) fecha en la cual quedó ejecutoriada la Sentencia de Segunda instancia proferida dentro del radicado 2012-00038-01 expedida por el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia del 29 julio de 2016 que condenó al señor Alexander Grisales López Alías Cauca como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado en contra del ciudadano Ricardo León Ramírez Cortés, toda vez que de las Pruebas arrimadas al proceso se desprende que los demandantes antes de dicha fecha ya tenían conocimiento de la presunta participación del Estado por omisión por los hechos ocurridos el 3 de abril de 2003.

Finalmente sostuvo que las subreglas planteadas por el H. Consejo de Estado señalan que no es límite el inicio o conclusión de la acción penal para que se lleve a cabo de manera concomitante el ejercicio de la acción administrativa, pues ese hecho no interrumpe los términos de caducidad, como tampoco resulta inaplicable el término de caducidad, pues no encontró pruebas de que existiera una limitante que impidiera el ejercicio del medio de control de manera previa, con todo un aplicación del artículo 10 CPACA resolvió rechazar la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

#### **IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

Sostiene la parte recurrente que es contrario a derecho contabilizar desde el 11 de abril de 2003, cuando la víctima estaba impedida para ejercitar el medio de control por encontrarse privada de la libertad y si bien la denuncia la interpuso la compañera permanente del actor apenas se encontraba en curso la investigación, y que solo se tuvo certeza de su culpabilidad con la sentencia en firme que así lo confirmara, por lo que también se descarta que el demandante tuviera tal conocimiento antes de la ejecutoria de dichas decisiones.

Finalmente, la recurrente con fundamento en Sentencia de la Corte Constitucional SU 406 de 2016 señala que el cambio jurisprudencial fue determinante en la decisión del *A quo* pues se basa en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2019.

#### **CONSIDERACIONES:**

##### **4.1. PROBLEMA JURÍDICO**

El asunto que se discute se contrae a establecer:

*¿En el presente caso es procedente declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa incoado en el presente asunto, conforme lo determinó la autoridad judicial de primera instancia en la recurrida providencia, o, por el contrario, se presenta una de*

*las excepciones a la regla general sobre caducidad del medio de control, consagrada en el artículo 164 del CPACA?*

#### 4.2 TESIS DE LA SALA

La Sala considera que en el presente caso es procedente declarar probada la excepción de caducidad del medio de control incoado, pues el conteo del término procedía desde el día 24 de febrero de 2009 (Fl. 133), fecha de ejecutoria de la sentencia que confirmó la condena contra el señor Eduardo Andrés Ramírez Quiroz, aunado que no se trata de un delito de lesa humanidad como para desconocer el conteo del término. Luego, no se requería la aplicación de la Sentencia de Unificación a la que aludió el *A quo* para verificar que la demanda se encuentra afectada por el fenómeno jurídico de la caducidad, si como dijo la recurrente, fue determinante en la decisión adoptada por el *A quo*. Ello es así porque de tiempo atrás el Consejo de Estado ha reiterado su posición frente al conocimiento del hecho resarcible y la ejecutoria de la sentencia cuando se trate del delito de desaparición forzada.

#### 5. CONSIDERACIONES

El artículo 244 de la Ley 1437 regula el trámite del recurso de apelación contra autos y una vez verificado el expediente, se observa que el recurso fue presentado dentro de la oportunidad legal y sustentado en audiencia.

Por su parte el numeral 3º del artículo 243<sup>2</sup> ibídem, consagra que es apelable el auto que pone fin al proceso, razón por la cual es procedente estudiar el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte demandante contra el auto del 5 de marzo de 2020, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Cali.

##### 5.1. EFECTO RETROACTIVO DEL CAMBIO JURISPRUDENCIAL.

Al respecto indicó la Subsección “B”, Sección Tercera del H. Consejo de Estado en Auto del 25 de septiembre de 2017 con ponencia del Consejero Dr. Danilo Rojas Betancourth:

*“Cuando se operan cambios jurisprudenciales a partir de una reinterpretación de las normas vigentes, se considere implícitamente que la nueva regla jurisprudencial es aplicable tanto al caso por virtud del cual se realiza el cambio, como a los que se resuelvan con posterioridad, por respeto al precedente judicial, garantía derivada del derecho a la igualdad lo anterior más aun cuando se trata de sentencias de unificación jurisprudencial cuya fuerza vinculante es mayor. por tanto, la aplicación de reglas jurisprudenciales a actuaciones iniciadas con anterioridad a su formulación no viola, en principio, ese pilar fundamental del estado de derecho que es la irretroactividad de la ley. sin embargo, si bien en principio la nueva regla jurisprudencial debería aplicarse de manera inmediata, puede que ocurran eventos en los que dicha aplicación afecte de modo tal el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la defensa o principios como el de la seguridad jurídica u otros consagrados por el mismo ordenamiento, en el que el costo resulte abiertamente desproporcionado en relación con las razones que justificaron el cambio, caso en el cual sería necesario optar por fijarle efectos prospectivos que, establecidos para cada situación, eviten las consecuencias indeseables desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. conforme a lo anterior, es sólo en consideración a las circunstancias particulares de cada caso que podría determinarse adecuadamente el momento a partir del cual dicho cambio debería empezar a operar de allí que, se tiene la prospectividad como excepción en materia de aplicación de cambios jurisprudenciales. en conclusión, los cambios jurisprudenciales deben ser*

<sup>2</sup> Artículo 243. Apelación

Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:  
(...)

**3. El que ponga fin al proceso. (...)**

*de aplicación inmediata, salvo que, a la luz de un juicio de ponderación de los derechos y principios constitucionales en pugna, se concluya que la misma contraría principios, valores y derechos consagrados por el ordenamiento jurídico, esto es, que dicha aplicación implica consecuencias constitucionalmente inadmisibles, de modo que sólo en este último caso sería realizar ejercicios de modulación en el tiempo de los efectos de la decisión que eviten o temperen dichas consecuencias*". -Subrayas de la Sala-

En éste punto es preciso destacar que el enunciado normativo contenido en el artículo 164 CPACA literal "i" que el Consejo de Estado tuvo en cuenta para unificar el término de caducidad en delitos de desaparición forzada, fundamento de la decisión que se revisa, no es un análisis nuevo ni por virtud de la ley, ni por desarrollo jurisprudencial de manera que no puede la parte recurrente asumir que se le sorprende con el cambio jurisprudencial cuando de vieja data el Consejo de Estado ha tenido en cuenta tal diferenciación por imperio de la ley, así:

*"Además, cabe mencionar que en el derecho interno existe un tipo de reclamación de reparación estatal por violaciones a derechos humanos que tiene cómputo de caducidad especial como lo es el artículo 7 de la Ley 589 de 2002 -modificatorio del C.C.A.-, disposición reiterada en el literal i del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., el cual establece que el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se contará i) a partir de la fecha en que aparezca la víctima o ii) en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición, regla esta última que permite evidenciar el carácter especial y flexible de la caducidad en situaciones que involucren afectaciones graves de derechos humanos.*

*De igual forma, esta Corporación ha indicado que para el conteo del término de caducidad siempre debe acudir al caso concreto y observar sus particularidades, y en tal sentido se ha dispuesto que en eventos como los del desplazamiento forzado el término para intentar la acción inicia a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo, esto por considerar que se trata de daños de carácter continuado*<sup>3</sup>". -Subrayas de la Sala-

## **5.2. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD.**

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término oportuno.

La caducidad busca atacar la interposición del medio de control por haber sido impetrado tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso, llevando consigo que la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio pueda verse afectado.<sup>4</sup>

El artículo 164 literal "i" del CPACA que regula los términos para presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, indica que cuando se pretenda incoar el medio de control de reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Cuando se trate del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de julio de 2011, Expediente 41037, C.P. Enrique Gil Botero.

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00077-01(40425) C.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO. 15 de diciembre de 2011.

El Consejo de Estado, haciendo una integración normativa entre las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario y los principios del derecho internacional público del *ius cogens* y de humanidad, según los cuales, la responsabilidad penal de individuos por actos de lesa humanidad es imprescriptible, y en esa medida las normas adjetivas internas, deben comprender también dicho alcance para el fenómeno de la caducidad en ejercicio del medio de control de reparación directa.

Así, determinó que cuando se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado por acción, omisión o inactividad de la que puedan derivar daños antijurídicos producidos con ocasión de actos constitutivos de lesa humanidad (cometidos por agentes o representantes del Estado), la caducidad del medio de control de reparación directa de manera única y excepcional no operaría, o se producirían efectos similares a la imprescriptibilidad que se afirma de la acción penal; en palabras de la Colegiatura:

*“En este orden de ideas, apelando al carácter de norma de jus cogens de la imprescriptibilidad de la acción judicial cuando se investiguen actos de lesa humanidad, sin que sea posible oponer norma jurídica convencional de derecho internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario o interno que la contraríe, la Sala admite, entonces, que en los eventos en que se pretenda atribuir como un daño antijurídico indemnizable un hecho que se enmarca un supuesto de hecho configurativo de un acto de lesa humanidad, previa satisfacción de los requisitos para su configuración, no opera el término de caducidad de la acción de reparación directa, pues, se itera, existe una norma superior e inderogable reconocida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y refrendada en el contexto regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispone expresamente que el paso del tiempo no genera consecuencia negativa alguna para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral de los daños generados por tales actos inhumanos.”<sup>5</sup>*

En ese orden, se hizo un llamado al Juez contencioso administrativo a ejercer el control de convencionalidad y a operar la integración normativa de aquellas reglas correspondientes a cada uno de los ámbitos del derecho mencionados, bien sea de manera directa (por haber sido firmados y ratificados los textos normativos), o por vía de la aplicación de los principios (mandatos imperativos) del *ius cogens*, de humanidad y el criterio de universalidad.

El alto tribunal ha precisado que los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad.<sup>6</sup>

Las características principales que se pueden destacar del delito de lesa humanidad son: su autonomía frente a otros crímenes, especialmente aquellos de guerra y su imprescriptibilidad en tanto que participa de la categoría de delito internacional; puesto que el delito de lesa humanidad no requiere, para su configuración, que se ejecute dentro de un contexto de un conflicto armado internacional o interno, basta, a diferencia del crimen de guerra, que se compruebe la configuración de una modalidad específica de ejecución cual es en el marco de una actuación masiva o sistemática.

De manera que, la configuración de un delito de lesa humanidad no se agota simplemente en la ocurrencia de alguna de las conductas puntualmente tipificadas como tal (v. gr. asesinato, tortura,

<sup>5</sup> CONSEJO DE ESTADO, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Radicación: 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671), Actor: Cruz Helena Taborda Taborda y otros.

<sup>6</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092) Actor: TERESA DEL SOCORRO ISAZA DE ECHEVERRY Y OTROS Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.





etc.), pues se trata de delitos comunes reconocidos de antaño por las disposiciones penales en el derecho interno, sino que es exigencia *sine qua non* acreditar los elementos *contextuales* que cualifican y hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, estos son: que se ejecute (i) contra la población civil y (ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático.

Adicionalmente, con el propósito de hacer efectiva la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, el alto tribunal ha señalado que aunque la desaparición forzada y el desplazamiento forzado no constituyen por sí solas crímenes de lesa humanidad, pues para la configuración de estos crímenes se requieren elementos adicionales a la ocurrencia del delito –mencionados en líneas anteriores–, lo cierto es que sí constituyen graves violaciones a los derechos humanos, que requieren de un tratamiento diferenciado para configurar otras de las excepciones al conteo del término de caducidad, pues lo que se persigue con la interposición de la acción ante la jurisdicción contencioso administrativa en esos casos, es la reparación de bienes esenciales legítimos que también son de interés público.

#### 4.5 CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328<sup>7</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>8</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

La apelante manifestó que el *A quo* no tuvo en cuenta que se trata de un delito de lesa humanidad, que se desconoció el cambio de precedente y su aplicación en el tiempo pues la sentencia de unificación que sustentó el rechazo es posterior a la interposición de la demanda, por lo que no debió tenerse en cuenta, aunado que se reprocha la fecha inicial tomada por el *a quo* para el conteo de la caducidad, pues afirma, debió tomarse la de ejecutoria de la última sentencia de la jurisdicción ordinaria penal en la que se condenó al señor Alexander Grisales López como coautor en el delito de secuestro extorsivo agravado, esto es, 8 de febrero de 2017 porque hasta esa fecha los demandantes no conocían el grado de responsabilidad de las demandadas.

Sea lo primero señalar que no se trata de un delito de lesa humanidad como para desconocer el término de caducidad, conforme se pasa a exponer:

En aplicación de los parámetros interamericanos de protección a los derechos fundamentales, y en acatamiento de la obligación del juez contencioso administrativo de actuar como juez de convencionalidad, para dar garantía al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, los constitucionales *pro damnato*<sup>9</sup> y *pro actione*<sup>10</sup>, y el derecho convencional de acceso a un recurso judicial efectivo que permita la reparación y el restablecimiento de los derechos vulnerados (artículos 25 y 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos).

<sup>7</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>8</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

<sup>9</sup> "(...) el principio *pro damnato* que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas" (Ricardo de Angel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, Editorial Civitas, 1993. 3ª ed., p. 154). Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 13 de diciembre de 2007. Radicación 33.991, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

<sup>10</sup> "Bajo tal precepto, se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez constitucional, en cualquiera de las cuatro acciones constitucionales, debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos". Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 8 de marzo de 2002. Radicación, ACU 1235, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

Lo anterior en consideración a que si bien, siendo consecuentes con la gravedad y magnitud que tienen tales actos denigrantes de la dignidad humana, hay lugar a reconocer que el paso del tiempo no genera consecuencias desfavorables para quienes de manera directa, fueron víctimas de tales conductas y pretenden la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por los daños antijurídicos irrogados en su contra<sup>11</sup>, no es suficiente que en la demanda se alegue la existencia de un hecho constitutivo de un delito de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos, pues también es necesario que el juez administrativo verifique en cada caso concreto, la configuración de tales conductas, tal y como expresamente lo ha considerado el Consejo de Estado<sup>12</sup>:

*“(…) Los delitos de lesa humanidad o contra la humanidad son aquellos actos de extrema crueldad que niegan la existencia y vigencia de los derechos humanos al desprestigiar de manera grave la dignidad humana; para su configuración se requiere que tales actos sean sistemáticos o generalizados, entendiendo esto último como la realización de ataques masivos, frecuentes, ejecutados colectivamente, de gravedad considerable y dirigidos contra multiplicidad de víctimas. Conforme los elementos normativos del Estatuto de Roma y en el entendimiento que de ellos ha adelantado la Corte Constitucional, para la configuración de los delitos de lesa humanidad se requiere : i) que exista un ataque generalizado o sistemático, ii) que dicho ataque esté dirigido contra la población civil, iii) que implique la comisión de actos inhumanos –asesinato, exterminio, esclavitud, traslado forzoso de población, entre otros-, iv) que haya conocimiento de que se trata de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil; v) que para los actos de persecución solamente ha de tomarse en cuenta los fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; y vi) el contexto dentro del cual puede ocurrir un crimen de lesa humanidad puede ser en tiempos de paz, de guerra internacional o de conflicto interno.(…)” – Subraya de la Sala-*

Ahora bien, la apoderada judicial de la parte actora en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la providencia que se revisa, como quiera que en el presente asunto se alega un delito que cataloga como delito de lesa humanidad, el cual no cuenta con término de caducidad.

Si bien es cierto, en el material probatorio obrante en el plenario se encuentra sendas providencias en las que son condenados el señor Eduardo Andrés Ramírez Quiroz (Fls. 76-132) y ALEXANDER GRISALES LÓPEZ (Fls. 24-73), por el secuestro extorsivo del señor Ricardo León Ramírez Cortés, la configuración del delito de lesa humanidad no se agota simplemente en la ocurrencia de alguna de las conductas puntualmente tipificadas como tal (v. gr. asesinato, tortura, etc.), pues se trata de delitos comunes reconocidos en el derecho interno pero que requieren de la conjunción de elementos *contextuales* que cualifican y hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber: que se ejecute (i) contra la población civil y (ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático.

Aplicando los anteriores lineamientos jurisprudenciales, se observa que los hechos ocurridos el 03 de abril de 2003, obedecieron a un acto reprochable realizado por grupos armados en el marco del conflicto armado interno; pero cuyo daño antijurídico alegado, no fue producido por un acto que pueda ser calificado como de lesa humanidad, al no haberse dirigido a la población civil<sup>13</sup>, o dirigido contra un grupo poblacional específico, por el rol, raza, orientación sexual, filiación política, o cualquier otra característica que identificara al demandante.

<sup>11</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: **JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA**, sentencia proferida el cinco (5) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) dentro del proceso identificado con la radicación número: 05001-23-33-000-2016-00587-01(57625).

<sup>12</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: **RAMIRO PAZOS GUERREROS**, sentencia proferida el ocho (08) de julio de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso identificado con la radicación número: 02001-23-33-000-2018-00150-01(61087).

<sup>13</sup> Artículo 50 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, que establece, por exclusión, a quienes se les considera población civil, en los siguientes términos: “1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil.”, constituye, entonces, población civil todas las personas que no se encuadran dentro de las categorías de miembros de las fuerzas armadas y prisioneros de guerra.

En consecuencia, y solamente para efectos de la responsabilidad estatal aquí demandada, la Sala considera que los elementos estructuradores del concepto de lesa humanidad no se encuentran demostrados, y por esa razón debe aplicarse el término de caducidad previsto por el legislador para el medio de control de reparación directa.

Descendiendo al sub-júdice se tiene, que el demandante pretende su contabilización desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que confirmó la condena al señor Alexander Grisales López, esto es, 8 de febrero de 2017. La Sala comparte la decisión del A quo sobre el particular, porque el demandante conoció de la confirmación de la sentencia ejecutoriada del coautor de su secuestro señor Eduardo Andrés Ramírez Quiroz el día 24 de febrero de 2009 (Fl. 133), dicha sentencia definió tanto la calidad de víctima del demandante como el conocimiento de responsabilidad por omisión del Estado en el hecho de su secuestro; al margen de que existieren otros hechos que pudiesen ser investigados en cabeza de otras personas implicadas en el hecho delictivo. Lo cierto es que, para el demandante resulta patente desde dicha fecha que los perjuicios a él irrogados lo fueron por acción de un grupo al margen de la ley y por omisión del Estado, según la estructura de la demanda, por lo que desde allí debió contabilizar la caducidad del medio de control de reparación directa y, como quiera que ese lapso está ampliamente superado, deviene prospera la excepción de caducidad declarada por la autoridad judicial de primera instancia.

Finalmente, la parte demandante reprochó del A quo la aplicación de la Sentencia de Unificación fechada 29 de enero de 2020, para analizar la prosperidad de la excepción de caducidad frente a una demanda interpuesta el 26 de marzo de 2019 (Fl. 18 C1). La Sala entiende el argumento de la parte recurrente desde el juicio de ponderación de derecho que informan los principios constitucionales en pugna, sin embargo, no la acompaña pues como viene de verse, el análisis que de la caducidad hizo el *a quo* desde el punto de los efectos del cambio jurisprudencial en el tiempo, es claro que lo hizo luego de afirmar que la caducidad se encontraba configurada desde la ejecutoria de la Sentencia que confirmó la condena del señor Ramírez Quiroz -24 de febrero de 2009; quiere ello decir que solo se ocupó del análisis jurisprudencial como bien lo indicó *“a suerte de discusión y en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia”*. Aunado esto a que por ser dicha decisión de importancia jurídica su aplicación deviene inmediata.

Ahora bien, se destaca que frente al fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa, cuando se trata del delito de desaparición forzada, no hubo cambio aplicable al presente caso, pues su determinación sigue siendo frente a dos eventos i) la fecha en que aparezca la víctima y ii) desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, ello sin perjuicio de que la demanda pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos.

Parar mayor ilustración señala el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado:

*“La Sala precisa que para ejercer la pretensión de reparación directa no se requería tener certeza de lo ocurrido, pues, precisamente, ese es el objeto del proceso judicial, de ahí que las partes deben identificar los medios probatorios que consideren pertinentes, los cuales, previo decreto, se practican el desarrollo de la litis y, finalmente, se valoran en la sentencia. Así las cosas, en este asunto los demandantes no debían esperar a que se tramitara todo el proceso penal para formular sus pretensiones, pues para tal fin lo que debían hacer era acudir a esta jurisdicción dentro de los 2 años siguientes al momento en que estuvieron al tanto de la participación y eventual responsabilidad del Estado y solicitar las pruebas que sustentaran los hechos que constituyen la causa petendi de sus pretensiones, en concreto, que el señor Clodomiro Coba León no hacía parte de ningún grupo armado y que su muerte no era consecuencia de un combate entre las FARC y el Ejército*



Nacional. Si la parte actora consideraba que lo ocurrido en el proceso penal tenía efecto directo en el asunto de la referencia lo que le correspondía era presentar la demanda en tiempo y cuando el proceso estuviese para fallo solicitar su suspensión por prejudicialidad, en los términos del artículo 161 del C.G.P.; sin embargo, no procedió de conformidad.”

Lo anterior, solo evidencia que el Consejo de Estado hizo un ejercicio hermenéutico que concluye en aclarar la debida interpretación de las disposiciones adjetivas relacionadas con la caducidad del medio de control de reparación directa, pero de ninguna manera modifica o altera la postura que de vieja data asumió frente a la interposición de la acción cuando aquella refiere al delito de desaparición forzada, pues siempre ha entendido que no pende del proceso penal para que inicie la acción contenciosa administrativa.

Así las cosas, la Sala confirmará el auto interlocutorio del 5 de marzo de 2020 que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control incoado en este asunto, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali.

En consecuencia, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA-Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **R E S U E L V E:**


**PRIMERO. CONFIRMAR** el Auto interlocutorio del 5 de marzo de 2020, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad, por las razones expuestas en este proveído.

**SEGUNDO.-** Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. Acta No. **007**

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**  
Magistrado

  
**RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**

RADICACIÓN : 2019-00057-01  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA.  
Demandante : RICARDOLEÓN RAMÍREZ CORTÉS Y OTROS  
Demandado : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS



**Magistrado**

  
**JHON ERICK CHAVES BRAVO**  
**Magistrado**

*Proyectó: AA*  
*Vo Bo. Secretario*